

ALIANZAS, OPOSICIÓN Y ANTAGONISMO EN TRES FASES DE LA ARGENTINA KIRCHNERISTA (2001-2011)¹

Mg. Igal Kejsefman²

INTRODUCCIÓN

El concepto modo de producción y la ley general de acumulación capitalista que Marx presenta en *El Capital* corresponden a un alto nivel de abstracción, por lo que se precisan categorías intermedias para poder abordar objetos de estudio concretos. “En distintos períodos históricos, y/o en diferentes formaciones sociales, la dinámica de la acumulación adquiere características específicas. Es esta especificidad la que intenta ser conceptualizada bajo la ‘categoría intermedia’ de modo de acumulación” (Piva, 2012: 87). Aglietta (1976) hace un aporte fundamental para comprender la crisis capitalista y su regulación; sin embargo, en su enfoque -y en el de quienes han continuado por esa línea de investigación- la acumulación como terreno de la acción de leyes objetivas parece separada de la lucha de clases. En este sentido, Bonnet (2008) apela a la categoría de modo o estrategia de acumulación (Jessop, 1980; 1990) para dar cuenta de las especificidades de la acumulación de capital en sociedades determinadas, considerando acumulación y Estado como dos formas de una misma relación de subordinación del trabajo al capital. Este señalamiento nos permite pensar que si bien hay una ley general de la acumulación capitalista (genérica), esta se realiza de manera específica en cada período del capitalismo y en cada formación social; en otras palabras, existen diferentes modos de acumulación. Siguiendo a Piva (2017) entendemos el *modo de acumulación* como el momento específicamente económico del modo de reproducción ampliada del capital como totalidad orgánica, por lo que refiere a una articulación específica entre acumulación de capital (momento estrictamente económico de la acumulación) y dominación (momento estrictamente político de la acumulación), es decir, que da cuenta de la interrelación dinámica entre la economía y la forma de Estado -sólo separables analíticamente- en un ámbito nacional. En este sentido, en el presente trabajo dejamos expresamente de lado las relaciones de dependencia (económica y política) y la configuración (económica y política) el sistema mundial, concentrándonos en el proceso social en el ámbito nacional.

¹ Cabe aclarar que el presente trabajo recorta un capítulo de la tesis de maestría *La inserción internacional y el conflicto distributivo en la dinámica del ciclo de acumulación en América Latina: los casos de Argentina y Brasil (2001-2011)*. En consecuencia podrían aparecer definiciones o conceptos cuya elaboración se encuentra desarrollada en otro capítulo. Asimismo se realizaron cambios triviales con el único fin de mantener la coherencia interna del texto recortado. Para acceder al texto completo enviar un correo electrónico a igalkej@gmail.com.

² Igal Kejsefman, Lic. en Economía (UBA), Mg. en Estudios Sociales Latinoamericanos (UBA), Doctorando en Ciencias Sociales (UBA), Becario del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC-FSOC-UBA).

También cabe aclarar que aquí no analizaremos el momento económico de la acumulación del capital en Argentina, sino que sus condiciones estructurales aquí se consideran dadas. Utilizaremos las notas al pie para clarificar estos supuestos cuando sea indispensable para la comprensión del momento político. Por lo tanto, suscribiéndonos al ámbito nacional el presente trabajo se centra en momento político de la acumulación de capital, es decir, la lucha de clases en Argentina entre 2001 y 2011. Asimismo estudiaremos específicamente al *conflicto distributivo* en tanto manifestación particular de la categoría lucha de clases -que no niega otras manifestaciones ni las subordina-, refiriéndonos a las disputas que se abren entre clases y fracciones de clase en torno a la definición del trabajo necesario y la apropiación del plusvalor.

Situándonos en el momento político de la acumulación de capital los capitalistas y los trabajadores no se nos aparecen como la personificación inmediata del capital y el trabajo respectivamente, sino como personas de carne y hueso que protagonizan un enfrentamiento real que involucra todos los aspectos de la vida: una lucha de clases. Resulta evidente que los trabajadores no conforman inmediatamente una clase *en sí para sí*, aunque cabe aclarar que los capitalistas tampoco. Los capitalistas no se comportan inmediatamente como clase sino que forman una clase en tanto se comportan como capitalistas, es decir, como capitales individuales que compiten *-para sí-* por la apropiación de plusvalor, lo que vuelve contingente su constitución *en sí para sí*. *Ex ante* sólo encontramos capitalistas o vendedores de fuerza de trabajo estrictamente individuales. Su constitución como clases *ex post presupone una mediación*, abre lugar a la crisis, a victorias y derrotas y por lo tanto a la indeterminación, a la historia.

En el presente trabajo analizaremos aquello que en las Cuentas Nacionales se denomina Generación del Ingreso para comprender las alianzas y las oposiciones entre diferentes agrupamientos de capitales individuales que si bien “emergen de la competencia, aquellos agrupamientos son propiamente políticos” (Bonnet, 2012: 96), tal como el antagonismo con los trabajadores -que a su vez, tienen sus propios agrupamientos y conflictos internos-. De esta forma, primará en el análisis un nivel fraccionalista del conflicto distributivo. Por último, cabe aclarar que si la clave para la comprensión de la postconvertibilidad radica en la crisis del 2001, está sólo puede comprenderse a la luz de las disputas, victorias y derrotas de clases y fracciones de clase en la Convertibilidad. Por lo tanto, el primer apartado lo dedicaremos a la Convertibilidad y su crisis. Los tres apartados siguientes se dedicarán a tres fases diferentes del conflicto distributivo, enfatizando el denominado Conflicto del Campo como un gran punto de inflexión.

1. EL CONFLICTO DISTRIBUTIVO: LA CONVERTIBILIDAD Y SU CRISIS

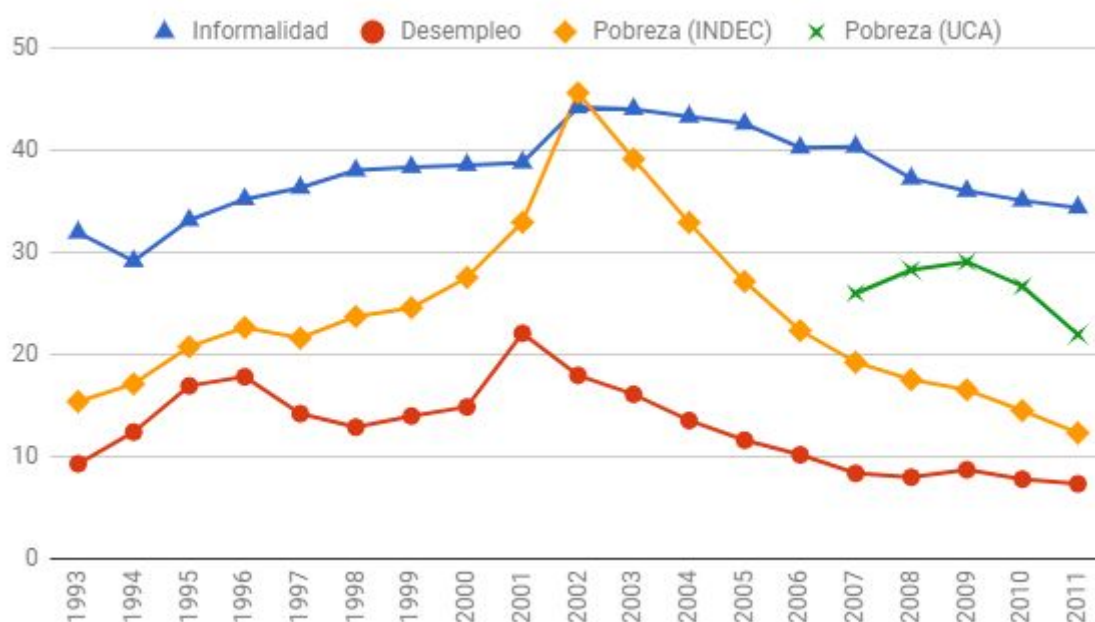
Abstrayendo el conflicto distributivo entre clases y fracciones de clase de la relación social capital, la Convertibilidad no representa ni una *necesidad* del capital, ni una imposición del centro -recordemos que el canciller Di Tella hablaba de “relaciones carnales con Estados Unidos” y que Cavallo le asigna a dicho país un rol central en la implementación del plan (Cavallo, 2004)-. Dicho régimen monetario sobrevaluado sirvió a la pauperización de la vida y generación de pobreza (GRÁFICO 1) que explica de un modo “determinante la expansión económica que experimentaron las principales empresas que actúan en el ámbito doméstico” (Schorr, 2001), fundamentalmente aquellas dedicadas a la producción agroindustrial orientada a la exportación, aunque no sólo para eso. Luego de la violencia hiperinflacionaria (Bonnet, 2002) y durante la Convertibilidad los sectores más concentrados de la clase dominante lograron concretar las metas que había proyectado Krieger Vasena: la sustitución de trabajo por capital, de una forma tal que ni la dictadura del '66 ni la del '76 (Pryluka, 2015) ni el programa económico de Sourrouille³ (Ortiz y Schorr, 2006) llevaron a fondo, transformando el aparato productivo, modernizándolo.

Asimismo, la Convertibilidad se transformó también en un método eficaz para la lucha al interior de la clase dominante. Dicho de otro modo, así como la última dictadura desarmó las capacidades ofensivas de los sectores populares prohibiendo sus organizaciones y persiguiendo y asesinando a sus dirigentes, la hiperinflación agobió al conjunto de los trabajadores hasta su derrota. La política aperturista de los '90 terminó de subordinar a los sectores dominantes que en el pasado habían impulsado y se habían beneficiado de una estrategia de desarrollo capitalista “hacia adentro”, cuya producción de bienes transables no era competitiva internacionalmente. Por lo tanto, la transformación productiva y la internacionalización implicaban ir contra los trabajadores y contra las fracciones capitalistas mercadointernistas que tenían al salario más como factor de demanda (y, en consecuencia, realización del plusvalor) que como costo⁴. La apertura económica no daba lugar a los capitales no competitivos internacionalmente, dejando la modernización productiva como única alternativa a los capitalistas que no quisieran sucumbir frente a la competencia. En otras palabras, la forma de Estado, producto del enfrentamiento entre clases y fracciones de clase, expresó una correlación de fuerzas en la cual existió tal desbalance en favor de la burguesía que el cierre de fábricas y la reestructuración de capitales no requirió la desactivación política a través de la violencia y la proscripción explícita y permanente. Ya en democracia, la instauración de la Convertibilidad con una ley aprobada en el Congreso Nacional cristalizó el cierre de una disputa que se prolongó durante varias décadas.

³ Que, por otro lado, Grinspun ni siquiera pretendió.

⁴ Sin perder de vista que el salario siempre constituye de un modo simultáneo y contradictorio un costo y un factor de demanda. Por eso cada capitalista individual quiere pagar salarios bajos (aumentar su ganancia) y que los demás capitalistas paguen salarios altos (garantizar la realización de sus mercancías).

GRÁFICO 1 : POBREZA, DESEMPLEO E INFORMALIDAD LABORAL (%). 1993 - 2011.



FUENTE: Elaboración propia en base a CEDLAS, CEDLAC Y Observatorio Social de la UCA.

Nota: Como línea de pobreza se tomó la población que vive con menos de 4 dólares diarios. Se consideró trabajador/a informal a quienes no gozan de aportes jubilatorios.

La Convertibilidad propinó una derrota sustantiva de los trabajadores, consiguió la subordinación de unos sectores capitalistas a otros, y paradójicamente también constituyó una herramienta de consenso y construcción de hegemonía, es decir, que ni el conjunto de los trabajadores ni fracciones de la burguesía impugnaron la Convertibilidad desde el comienzo, sino más bien lo contrario. La “hegemonía menemista” (Piva, 2012) implicó que los derrotados no lograron proyectar una alternativa. Los empresarios reunidos en el Grupo de los Ocho pusieron de manifiesto la unidad política del conjunto de las fracciones de la burguesía en torno al programa de la Convertibilidad, y no sólo de los sectores exportadores, financieros y empresas privatizadas. Por supuesto, ninguna de estas consideraciones puede soslayar las diferentes resistencias que durante los años ‘90 se desplegaron contra el avance capitalista, la intensificación de la explotación, la flexibilización laboral, las privatizaciones y los despidos, como el caso de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) creada en 1991 y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) conducido por Moyano como línea disidente al interior de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Hacia 1998, la yuxtaposición entre una creciente conflictividad social y la desaceleración económica reabrió el debate al interior de la burguesía en torno al destino de la Convertibilidad. Las dificultades importadas por la crisis del real que comenzó dicho año y se desató con la devaluación de enero de 1999 requería -en el marco del *statu quo* que impedía la devaluación- la imposición de nuevas bajas salariales y/o crecimiento de la productividad. Cabe apuntar que mientras no se violen en el largo

plazo los niveles de subsistencia, la acumulación no encuentra límites en las bajas salariales. Si estas medidas se pusieron en discusión fue por el límite impuesto “desde abajo” en la lucha por el salario que se agudizó a lo largo de los ‘90. Del contexto social menos favorable para los capitalistas emergió un “predominio [de] los intereses particulares de fracciones del capital por sobre su interés general” (Salvia, 2009: 1), desordenando el consenso y motivando una primera dispersión de las fracciones que se materializó en la disolución del Grupo de los Ocho y la conformación del Grupo Productivo. Las vacilaciones de la burguesía “respondían a que su comportamiento estaba condicionado por las luchas sociales que se estaban librando desde el llano en contra de la Convertibilidad” (Bonet, 2012: 110), aunque las diferentes posiciones -entre los que postulaban una salida vía devaluación y quienes postulaban la dolarización- “coincidían en que la variable de ajuste sean las condiciones de vida de los trabajadores” (Schorr, 2001: 1). De todos modos, las fuerzas centrífugas no ejercieron una presión tal como para desarmar el consenso entre las diferentes fracciones de la burguesía en torno al programa neoliberal.

La asunción de López Murphy el 5 de marzo de 2001 al frente del Ministerio de Economía constituyó una nueva ofensiva conjunta de los capitalistas, en la cual se jugaba la posibilidad de descargar las propias contradicciones de la alianza gobernante en los trabajadores. Sin embargo, la reacción frente al ajuste se volvió multitudinaria. La pretensión de arancelar la universidad pública movilizó a trabajadores de las capas medias urbanas que se sumaron a las crecientes movilizaciones de trabajadores. Catorce días más tarde, sin haber logrado construir consenso en torno a un nuevo ajuste, el estrepitoso fracaso del plan económico motivó la renuncia del Ministro. La imposibilidad de aplicar nuevos ajustes directos sobre el salario y/o la productividad requería una mediación estatal entre las fracciones de clase y entre las clases que tomara nota de las nuevas relaciones de fuerza en la lucha de clases. El retorno de Cavallo, quien gozaba de legitimidad y autoridad, buscó flexibilizar la Convertibilidad “otorgándole distintos tipos de concesiones a las fracciones dominantes enfrentadas con la finalidad de, siempre dentro de la Convertibilidad, reducir sustantivamente los niveles salariales de forma de recuperar competitividad” (Schorr, 2001: 13).

A través de promesa del flamante Ministro de implementar Planes de Competitividad, el Estado buscó mediar entre los diferentes capitales en competencia, manteniendo la unidad de la clase capitalista. La mediación involucraba, además de una serie de subsidios para los exportadores, una ampliación de la convertibilidad empalmada con el euro, mientras la UIA pedía que en la canasta de monedas se incluyera al real, ya devaluado. Frente a la posición del Grupo Productivo -que sumaba las adhesiones del MTA de Moyano-, se encontraban los grupos económicos extranjeros y las privatizadas que se veían perjudicadas por una “convertibilidad devaluada” y proponían reforzarla adoptando como moneda el dólar estadounidense, de modo que pudieran garantizar el valor de sus activos y sus remisiones a las casas matrices. Ambos sectores empresarios disputaban quién se quedaría con los

beneficios del ajuste obtenidos de los cambios en el esquema convertible.

Dicho de otro modo, la legitimidad de la cual gozaba la Convertibilidad al interior de la clase dominante impedía, incluso en períodos de fuertes tensiones, que algún sector planteara su abandono, lo que obligaba a ceñirse a los marcos que la misma establecía. Las diferentes alternativas propuestas, cuyo fin radicaba en mediar entre las fracciones, no lograron amainar la dispersión de la clase, motivo por el cual el Estado nunca las aplicó. Una vez descartada la devaluación o flexibilización de la Convertibilidad, Cavallo se vio obligado a retomar la senda del ajuste frontal. En mayo de 2001 el Ministro anunció el Megacanje, un plan que buscó diferir el pago inmediato de la deuda -como forma de alejar el default- a un costo elevadísimo (en torno al 15% anual), cuyas condiciones impactaron negativamente sobre el nivel de actividad. En julio, el Estado preparó un nuevo ataque a los trabajadores con el plan Déficit Cero que ajustó brutalmente el gasto, incluyendo un recorte del 13% a los jubilados y empleados públicos. “Este ajuste es particularmente relevante, decimos, porque desataría la oleada final de luchas que culminó en diciembre con el derrumbe de la Convertibilidad” (Bonnet, 2002: 8).

El recrudescimiento del ciclo de luchas en Argentina mostró un gobierno débil e incapaz de reconstruir su legitimidad, elemento que convenció al FMI de la inviabilidad del esquema convertible en general y de una dolarización en particular (Aranda, 2004). El conflicto que emergió “desde abajo” resultó decisivo en el desenlace de la confrontación entre fracciones de la burguesía. El cuadro social da cuenta de por qué la salida de la Convertibilidad no puede explicarse únicamente como una decisión técnica ni un designio teleológico, sino que debe contemplar las correlaciones de fuerzas. La consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola” testimonia, por un lado, la unidad y fortaleza de los trabajadores que desorganizó la unidad de los capitalistas, es decir, que desorganizó la clase; así como también la fragmentación y yuxtaposición de diferentes luchas sectoriales. Más allá de estas debilidades, el levantamiento popular de 2001 marcó un límite respecto de lo que el pueblo estaba dispuesto a soportar mientras se ensayaban otras experiencias de gobierno, participación y de producción, en medio de “movilizaciones, organizaciones y movimientos de todo tipo, cortes de ruta, piquetes, huelgas, escepticismo generalizado sobre los representantes políticos, sindicales y judiciales. De repente el 19-20 de diciembre aparece como el rayo auroral de la 'nueva imagen' de las asambleas” (Dri, 2006).

Por lo tanto, desde el conflicto distributivo -en tanto abstracción particular de la relación social capital-, la crisis de la Convertibilidad es la crisis de una determinada correlación de fuerzas entre clases y fracciones de clase que estaban cristalizadas en una política cambiaria. La exposición de los hechos da cuenta del carácter contingente de la salida de la Convertibilidad vía devaluación. En ese sentido, resultó central el modo en que evolucionó el conflicto social en general y la forma en que se fueron cristalizando nuevas correlaciones de fuerza en el marco del conflicto distributivo en particular. En los

primeros días del año 2002, luego de una maratónica asunción de Presidentes -que incluyó el anuncio del default de la deuda externa-, Eduardo Duhalde⁵ quedó a cargo del Poder Ejecutivo y el Congreso aprobó el fin de la Convertibilidad⁶.

2. DE LA CRISIS DE LA CONVERTIBILIDAD AL “TODOS GANAN”

Analizando el conflicto distributivo, la resistencia que impusieron los trabajadores al aumento de la explotación vía baja salarial o aumento de la productividad encerró a la Convertibilidad en un callejón sin salida y bifurcó los caminos de las fracciones de la burguesía, dispersando su unidad. Asimismo, el fin de la Convertibilidad signó el comienzo de una nueva disputa por la apropiación de los beneficios de la transferencia de ingresos -a causa de la devaluación- entre las fracciones capitalistas y los trabajadores. El movimiento de los precios pone de manifiesto la conflictividad entre clases y fracciones de clase en la cual cada una busca definir el trabajo necesario y apropiarse del plustrabajo. Los precios minoristas, mayoristas, el tipo de cambio, la tasa de interés y el salario expresan ganadores y perdedores, violencia, subordinación y consensos, según los casos (GRÁFICO 2).

Los sectores más beneficiados fueron, por supuesto, los exportadores, particularmente del agro y la agroindustria⁷, junto con productores de manufacturas industriales no competitivos internacionalmente. El proyecto del Grupo Productivo, que logró imponerse sobre las restantes fracciones capitalistas, propugnaba un perfil productivo “vinculado con las exportaciones y, estrechamente asociado a ello, de una estructura manufacturera muy asentada en ramas que se ubican en las primeras etapas del procesamiento industrial” y supeditado a la caída de los salarios (Schorr, 2001: 9). Su victoria, materializada en la asunción de de Mendiguren al frente del Ministerio de Producción, no implicó que su proyecto se haya concretado sin mediaciones ni oposiciones. Por el contrario, en tanto el doblegamiento de las restantes fracciones capitalistas se encontró ampliamente favorecido por la fortaleza popular que desordenó a la clase como unidad, el nuevo gobierno debía endogeneizar la nueva correlación de fuerzas, a la vez que contener nuevos avances de los trabajadores; bajo nuevas condiciones precisaban concretar el doble objetivo de, por un lado, mediar entre las

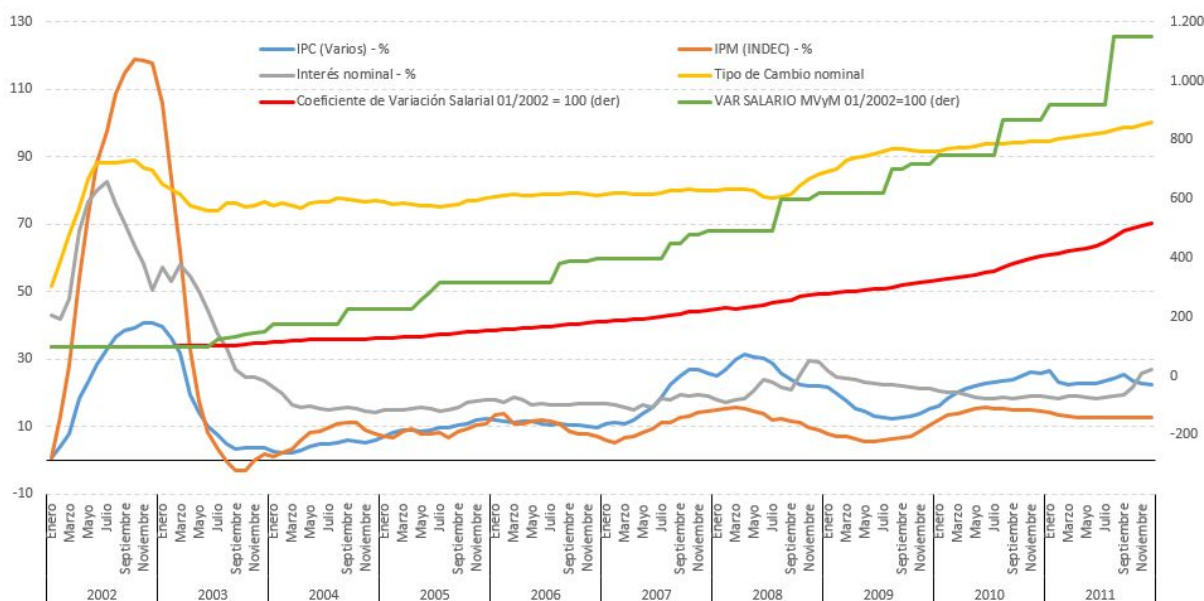
⁵ Desde hacía años que Duhalde apoyaba una salida devaluacionista (La Nación, 27/7/98; Clarín, 15/10/2001).

⁶ En torno al fin de la convertibilidad se ha abierto una polémica en las ciencias sociales, fundamentalmente entre quienes, como Basualdo, asignan un papel fundamental a las fracciones devaluacionistas y quienes, como Piva y Bonnet, asignan un papel fundamental al bloqueo deflacionista que conquistaron los trabajadores. El origen teórico de las diferencias consiste en que los primeros parten de la derrota de los trabajadores *ex-post* (la devaluación), por lo que cuando reconstruyen el proceso histórico no pueden asignar fuerza, protagonismo y victoria a un sujeto que fue derrotado. En cambio, los segundos centran su análisis en la contradicción de los procesos históricos en la que el freno al ajuste “no significa sin más que se haya inaugurado un período de conquistas para los trabajadores ni que la burguesía haya cejado en su ofensiva. (...) Las victorias de los trabajadores en la lucha de clases no suelen expresarse directamente como tales sino, de una manera perversa, como crisis capitalistas que a su vez acarrear nuevos sufrimientos a los trabajadores. Pero no por eso dejan de ser victorias” (Bonnet, 2002: 15).

⁷ Beneficiados no sólo por la devaluación sino especialmente por el nuevo contexto internacional que se abre a partir de la incorporación de China a la OMC que aquí no podemos analizar.

diferentes fracciones y reconstruir la unidad de la clase capitalista y, por el otro, reconquistar la hegemonía sobre los trabajadores.

GRÁFICO 2: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, ÍNDICE DE PRECIOS MAYORISTA, SALARIO NOMINAL, TIPO DE CAMBIO NOMINAL, TASA DE INTERÉS NOMINAL. 01/2002 AL 12/2011.



Fuente: Elaboración propia en base a INDEC Y BCRA.

Nota: 1. En Argentina, para la tasa de interés nominal tomamos la tasa de interés de referencia del BCRA para adelantos de cuenta corriente al sector privado no financiero; 2. Al tipo de cambio nominal en Argentina le adicionamos un componente autónomo de mejorar la comprensión de las variables sin interceder en su evolución.

Durante la breve gestión de Remes Lenicov al frente del Ministerio de Economía, Duhalde decretó la pesificación de las deudas en dólares de hasta 100.000 dólares. Sin embargo, intensas presiones convirtieron una medida potencialmente beneficiosa para los sectores medios empobrecidos en una nueva confiscación y ataque a los trabajadores: la pesificación asimétrica. Con esta medida *todas* las deudas en dólares se pesificaron (1 a 1), beneficiando principalmente a los grandes grupos empresarios -como muestra el trabajo de Basualdo, Lozano y Schorr (2002)-, mientras que todos los depósitos en dólares se pesificaron a 1.40 por dólar. La pérdida de los bancos a causa de la pesificación asimétrica fue compensada por el Estado (Gaggero y Wainer, 2004). Adicionalmente el Estado se hizo cargo de las pérdidas patrimoniales de los bancos, aunque las obligaciones con no residentes o bajo legislación extranjera no entraron en las compensaciones (Damill y Frenkel, 2013). Por otra parte, se vieron más claramente perjudicados los acreedores extranjeros y las empresas privatizadas por la pesificación y el congelamiento tarifario de los servicios públicos.

La devaluación de casi el 300%, acompañada de una inflación interanual del 40,9% (INDEC), implicó una licuación de los salarios reales en un 30% que redujo la participación de los asalariados en el PBI del 38% al 31%, viéndose más afectados los trabajadores informales cuyo salario cayó año tras año

desde 1993 (Lindenboim, 2007). La enorme violencia ejercida por el Estado contra los trabajadores a través de la política económica benefició a los diferentes sectores capitalistas, potenciando las exportaciones o limitando las importaciones y haciendo competitivos capitales de baja productividad. A la violencia de la moneda se sumó, además, la represión directa: los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán actuaron como una medida disciplinadora destinada a los sectores sociales que desbordaban la integración propuesta por el Estado. Con estas disposiciones el Estado buscó mediar entre las fracciones capitalistas y reconstruir la unidad de la clase frente a los trabajadores.

Sin embargo, el levantamiento popular del 2001 impuso a la clase dominante nuevas condiciones para la (re)construcción de su hegemonía, imposible de agotar en el uso de la violencia: no atender la cuestión de la pobreza no constituía una opción para quienes pretendían mantener el gobierno y el orden -sortear la consigna "que se vayan todos"-, en un contexto de fortaleza de los sectores populares y de continuas manifestaciones e impugnaciones del sistema político durante el 2002. Esto manifiesta que si bien los sectores exportadores se vieron muy favorecidos por la devaluación, los "frutos del comercio internacional" (Prebisch, 1949) debían alcanzar a quienes se reproducen en el mercado interno (tanto capitalistas como trabajadores). De esta manera, la correlación de fuerzas sancionó un "derrame" en tanto redistribución de ingresos desde los sectores exportadores netos hacia los importadores netos (trabajadores y burguesía mercadointernista). Esa redistribución tuvo dos vías/mecanismos. La primera asociada a la disponibilidad de divisas que requieren los importadores netos adquirir bienes de capital e insumos imprescindibles para la acumulación de capital. En segundo lugar, la intervención económica del Estado -fruto del conflicto distributivo- impuso derechos de exportación (retenciones) de modo que permitió al Poder Ejecutivo llevar adelante políticas expansivas.

Durante el mismo año, contrario al proyecto impulsado originalmente por el Grupo Productivo, el propio de Mendiguren debió promover una industrialización ligada a la exportación en una economía globalizada, que a su vez permita mejores salarios (de Mendiguren, Clarín 18/1/2002, en Gaggero y Wainer, 2002), y crease consumidores para la burguesía mercadointernista -al estilo keynesiano- y no competitiva a nivel internacional, garantizando el reimpulso de la tasa de ganancia. Aquí reside la motivación que subyace al apoyo del conjunto de los industriales a la devaluación (Peralta Ramos, 2007: 379). El aspecto político de la política económica se propuso a la salida de la Convertibilidad la construcción de un consenso que, vía "derrame" (Ortiz y Schorr, 2007), incluya a los sectores del mercado interno (tanto capitalistas como trabajadores). El GRÁFICO 1 nos aproxima a la complejidad del año 2002. Por un lado, se incrementaron la pobreza y la informalidad y se desplomó el salario real, que a la vez impactó en la participación asalariada. Por el otro, comenzó a declinar el desempleo y se sentaron las bases de las políticas expansivas que tendrían sus efectos en los indicadores a partir de 2003. Sobre estas contratendencias comenzó a forjarse una nueva mediación del Estado entre las clases

y las fracciones de clase: bajo la conducción de los sectores exportadores -mayormente (agro)industriales-, el nuevo tipo de cambio “alto” favoreció a los sectores no competitivos a nivel internacional, que a su vez, son más intensivos en trabajo. El sector financiero, si bien no estuvo entre los ganadores de la crisis de la convertibilidad, evitó una importante derrota.

Al momento hemos expuesto el mapa de correlaciones de fuerza entre clases y sus fracciones en Argentina hacia el 2002, si bien no pretendimos agotar todas las aristas del problema. La lucha popular y la alianza tejida entre los sectores desocupados, trabajadores informales y formales, la clase media empobrecida e industriales -que aceptaban mejoras en la distribución del ingreso-, presionó por “perforar la copa”, es decir, impulsar la distribución del ingreso. Sin esta potencia social no puede explicarse que los ingresos de los exportadores netos se hayan trasladado hacia el mercado interno. “Las vacilaciones, las concesiones, las marchas y contramarchas del nuevo gobierno provisional de E. Duhalde no hacen sino poner en evidencia que los representantes de la burguesía aprendieron, después de sacrificar dos administraciones, que [las] relaciones de fuerza cambiaron” (Bonnet, 2002: 30). La presión “desde abajo” condicionó la reconstrucción de la dominación, presionando al Estado para construir una nueva mediación haciendo concesiones, transfiriendo ingresos a fracciones no competitivas y encausando el conflicto dentro de su institucionalidad (así sea mediante la violencia). Los asesinatos de Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002, a la vez que aleccionaron sobre los márgenes de acción de los trabajadores, aceleraron el llamado a elecciones y el recambio gubernamental. A quince meses del estallido popular del 2001, la asunción de Néstor Kirchner con el 22% de los votos imponía un condicionamiento social fuerte para la reconstrucción del consenso.

GRÁFICO 3: PBI REAL 2001 = 100. PARTICIPACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES ASALARIADOS (%). 1993-2011.

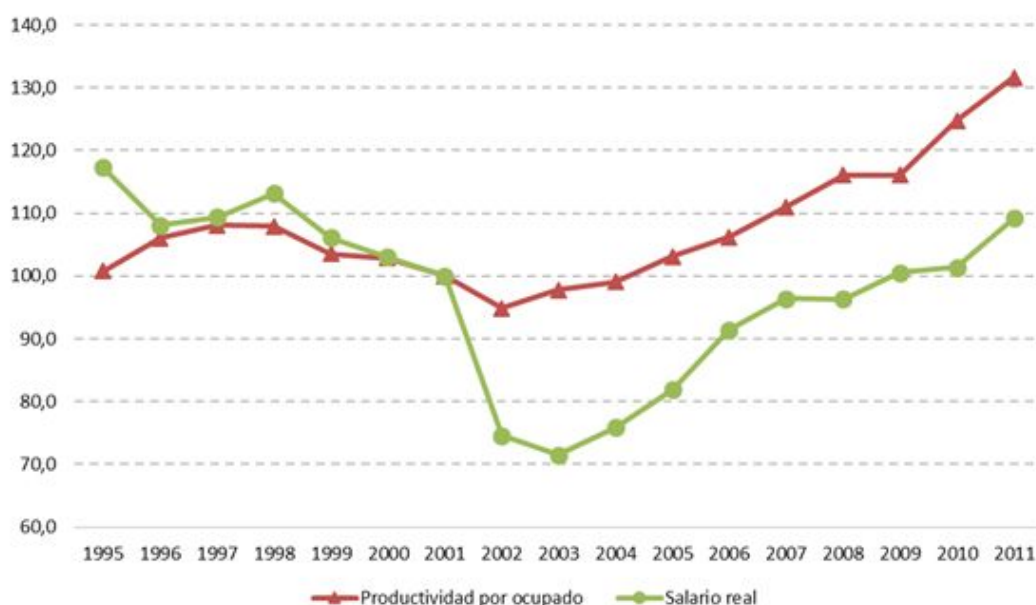


Fuente: Elaboración propia en base a FLACSO⁸.

⁸ Agradecemos profundamente la colaboración de Pablo Manzanelli, quien facilitó el acceso a la información.

La permanencia del equipo económico de Duhalde -al tiempo que sus principales medidas-, más allá del recambio presidencial, dio signos del consenso logrado en torno a su programa. En los años sucesivos el crecimiento del producto coincidió con crecimientos salariales y de productividad, aunque en diferentes proporciones. En los primeros años de la postconvertibilidad los trabajadores vieron crecer su salario real un 5%, al tiempo que creció el empleo y disminuyó sensiblemente la pobreza (GRÁFICO 1). “Sin embargo, cuando estas transformaciones en el mercado de trabajo se traducen, sobre la base de las mismas estadísticas, en términos de distribución del ingreso se constata una situación sorprendente que no parece estar en consonancia con estas modificaciones” (Basualdo, 2008: 3). En 2003 el crecimiento real del PBI en un 8% no fue acompañado por aumentos salariales semejantes, lo cual determinó que la participación de los asalariados en el producto haya permanecido estable. En 2004, el crecimiento del producto estuvo por encima del crecimiento de los salarios, elevando la participación de los trabajadores en el conjunto de la economía, aunque aún permanecía por debajo de los peores niveles de la Convertibilidad, en 1997. Dicho de otro modo, los trabajadores percibían más, pero de una torta mucho más grande (GRÁFICO 3). Durante el año 2005 los trabajadores volvieron a ganar peso en la distribución del ingreso, aunque recién ese año lograron alcanzar los niveles de 1997, el nivel más bajo de la Convertibilidad. El salario real volvió a crecer más rápido que la productividad (GRÁFICO 4), aunque persistió muy por debajo del 2001, el peor año de la Convertibilidad. El “derrame” permitió dinamizar la acumulación y, a la vez, mejorar los indicadores sociales, como puede observarse en el GRÁFICO 1.

GRÁFICO 4: PRODUCTIVIDAD y SALARIO REAL. 1995-2011. 2001 = 100



Fuente: Elaboración propia en base a FLACSO.

En su conjunto el análisis de los gráficos aquí presentados nos permite localizar el corazón de un consenso donde “todos ganan”: entre los trabajadores y los estratos más bajos la recuperación económica y social permitía depositar la confianza en ambos gobiernos; entre las fracciones de la burguesía, las ganancias se multiplicaban para los exportadores tanto agropecuarios como agroindustriales e industriales. Al mismo tiempo, como ya señalamos, la barrera cambiaria a las importaciones benefició a capitalistas cuya producción no podía competir en el contexto económico previo y se realizaba fundamentalmente en un mercado interno que estaba en crecimiento. Las dos vías para el derrame desde el sector externo hacia el mercado interno (disponibilidad de divisas y gravámenes al comercio exterior) permitieron erigir un Estado que pretendió colocarse como un tercero neutral, que pudiera mediar en la conciliación de clases, más allá de los intereses particulares.

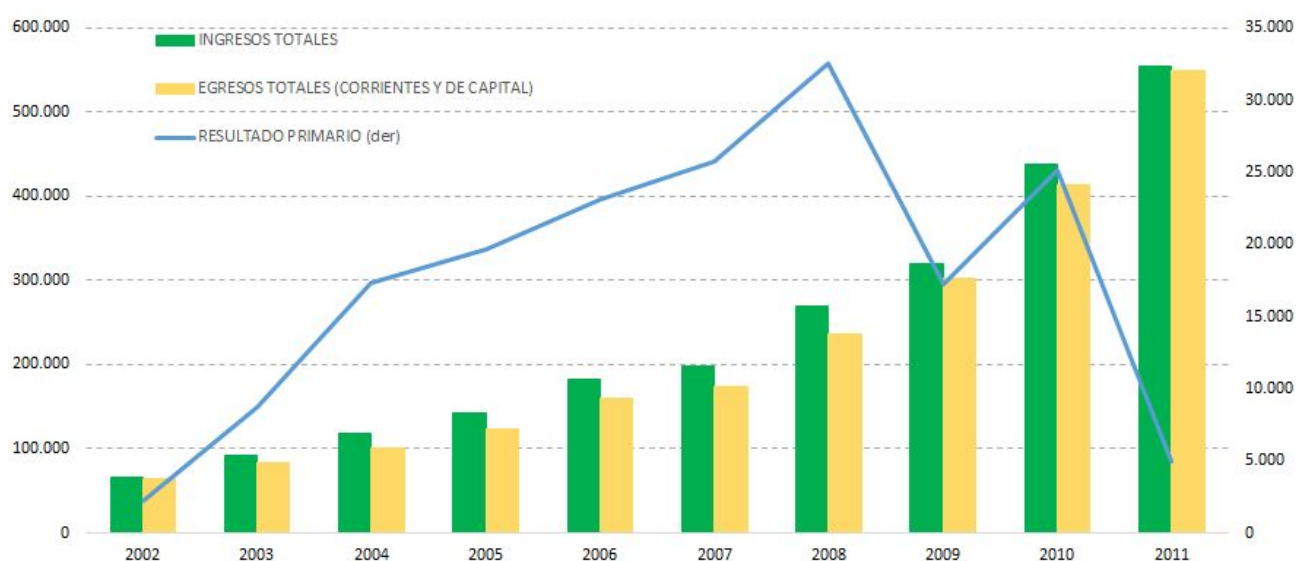
3. LA EROSIÓN DEL CONSENSO Y EL CONFLICTO DEL CAMPO

Durante el año 2005, cuando llegaron las primeras elecciones legislativas que debía enfrentar Kirchner, las diferentes fracciones de la burguesía comenzaron a discutir el destino económico del país cuya puja se reflejó en la aceleración de las principales variables, invirtiendo su tendencia (GRÁFICO 2). Los capitalistas exportadores netos comenzaron a plantear la necesidad de “enfriar la economía” para evitar la inflación (la economía venía creciendo a tasas cercanas al 10%) y tampoco ahorraron críticas a las retenciones. Como contracara, la fortaleza popular ponía en duda las posibilidades de éxito de una empresa que implicaba poner fin a la recuperación de las condiciones de vida de los trabajadores. En este contexto, la victoria de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires sobre Hilda “Chiche” Duhalde expresó la derrota de la alternativa del ajuste y la persistencia de la redistribución de recursos (plusvalía) hacia el mercado interno. Consecuentemente, el equipo económico de Lavagna se retiró del gobierno siguiendo el camino de Prat Gay, quien fue despedido del Banco Central un año antes por interceder en favor de los bonistas en la negociación de la quita de la deuda y por querer aceptar la supervisión del FMI en la política fiscal. Si de determinaciones -o necesidades del capital- se tratase, el debate se tornaría inexplicable: en tanto el Estado sería una personificación directa (racional) del capital, carecería de disyuntivas. En cambio, desde la perspectiva que venimos trabajando, el Estado no se constituye como el representante del capital sino como el garante de las relaciones capitalistas, y la forma que asume en cada momento está vinculada profundamente a la lucha de clases. La asunción de Felisa Miceli -de formación desarrollista- en el Ministerio de Economía anticipó la nueva intensidad de la intervención del Estado y la redistribución del ingreso vía gasto público. Dos semanas más tarde, el gobierno anunció que utilizaría el excedente de reservas internacionales disponible para cancelar en un solo pago la deuda con el FMI y cortar los vínculos con la institución.

Analizar la evolución fiscal y el gasto público, en conjunto con otros elementos, nos permite distinguir diferentes fases al interior del período que estamos analizando en el presente trabajo.

Observando estas variables confirmamos que mientras que en el primer momento de la postconvertibilidad el crecimiento porcentual de los ingresos superaba el crecimiento porcentual de los gastos, entre 2005 y 2008 el crecimiento porcentual del gasto superó el crecimiento porcentual de la recaudación, lo cual se verifica también en el cambio de pendiente de la serie del superávit Fiscal (GRÁFICO 5). Por lo tanto, si bien desde el punto de vista de la estructura económica los sectores exportadores constituyeron la vanguardia del relanzamiento de la acumulación, desde el punto de vista del conflicto distributivo el GRÁFICO 5 nos permite comprender que contradictoriamente la retaguardia -los capitales mercadointernistas y el conjunto de los trabajadores- logró imponer una forma distributiva (en sentido amplio) sobre los capitalistas orientados a la exportación.

GRÁFICO 5: RECAUDACIÓN, GASTO PÚBLICO Y SUPERÁVIT PRIMARIO, EN PESOS CORRIENTES. 2002-2011



Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía y AFIP para Argentina

La mediación estatal permitió cerrar la crisis del neoliberalismo, reordenar la clase dominante y legitimar el nuevo orden mediante el “todos ganan”, por el cual, como vimos, unos ganan más que otros en función de las victorias y derrotas pasadas y presentes. Los GRÁFICOS 3, 4 y 5 dan testimonio de la correlación entre fuerzas sociales desde 2005: el salario real creció más rápido que la productividad si bien en 2007 todavía no había alcanzado los niveles de la década del 90; la distribución del ingreso mejoró, aunque recién en 2007 superó el máximo relativo de 1998; la pobreza y el desempleo se redujeron muy marcadamente; y la informalidad descendió pero en 2007 aún permanecía en torno al 40%. En su conjunto estos elementos caracterizan una segunda fase. Mientras “todos ganan”, cambian las velocidades y proporciones en que ganan capitalistas y trabajadores, y por lo tanto cambia la ecuación de la alianza de gobierno.

Los mencionados cambios reanimaron el conflicto distributivo en torno a la definición del

trabajo necesario y la apropiación del plus trabajo abriendo una segunda fase de “consenso erosionado” en función del devenir de las correlaciones de fuerza. Las series temporales y argumentos hasta aquí presentados podrían llevarnos rápidamente a predecir un conflicto entre el conjunto de los capitalistas y los trabajadores. Sin embargo, la forma de presentar los datos hasta el momento podrían conducirnos a una simplificación o incluso introducir un sesgo en las conclusiones: tengamos en cuenta que, en torno a los estudios de la distribución del ingreso, suelen primar estudios que analizan el conjunto de las economías, abordando el objeto a partir del promedio de la productividad, del salario, del costo laboral, del producto o de la distribución. Esta advertencia nos permite deducir que existen sectores que en cada serie se mantuvieron por arriba o por debajo del promedio, dado que no todos los sectores crecieron en la misma proporción, ni todos los trabajadores cobraron el mismo salario, ni en todos los sectores la participación en el producto o la productividad es la misma. Conocer de modo diferencial el desenvolvimiento de cada rama nos otorgaría información adicional para comprender el conflicto distributivo y sus fases. A partir de bibliografía secundaria y de la reinterpretación de los datos expuestos en dichos trabajos, presentamos nuestra lectura del desarrollo del conflicto entre las clases y fracciones de clase.

Los datos arrojados por el estudio de Porta, Santarcángelo y Schteingart sobre el *Excedente y desarrollo industrial en Argentina (2014)*⁹ -a la luz de la perspectiva planteada en el presente trabajo- indican que desde el 2005 el conjunto de los trabajadores consiguió aumentos salariales mayores a la productividad y que a su vez, en diferentes proporciones, todos mejoraron su participación en el producto sectorial. Desagregando sectorialmente, los trabajadores de los sectores importadores netos gozaron una creciente brecha entre (a) sus incrementos salariales y (b) los aumentos -o incluso caída- de la productividad. A su vez esta brecha entre los mencionados sectores fue mayor que la experimentada en los sectores exportadores netos. A su vez, el conjunto de los sectores incrementó su producción, generando una demanda creciente de divisas al tiempo que, como dijimos, una mayor parte de ese producto fue apropiado por los trabajadores. Las condiciones estructurales de la economía determinaron que los sectores importadores netos fueran mano de obra intensivos, mientras que los sectores exportadores netos fueran capital intensivos¹⁰, empleando una menor proporción de la mano de obra. La mayor intensidad en la transferencia de recursos (plusvalía) hacia el mercado interno cristalizó la nueva correlación de fuerzas, a la vez que se tornó en condición necesaria -aunque no suficiente- para la canalización de las demandas de los trabajadores mediante el acceso al consumo, a los servicios públicos y a los beneficios sociales.

⁹ Agradecemos profundamente a sendos autores habernos facilitado el acceso a la base de datos de dicho trabajo.

¹⁰ Cabe aclarar la proposición: los “exportadores netos” -generalmente- son capital-intensivos (sectores modernizados) pero no todos los sectores capital intensivos son exportadores netos. Tal es el caso de la industria automotriz, que en tanto parte de la producción se realiza localmente configura un sector estructuralmente deficitario.

Por su parte, las empresas agropecuarias/agroindustriales articularon a propietarios -desde los pequeños hasta los grandes- que, dados los altos precios internacionales y los montos de los arrendamientos, han decidido arrendar sus campos (Barsky y Dávila, 2009: 101). Las mismas tuvieron la capacidad de imponer y trasladarle¹¹ el peso tributario de un modo indirecto a los rentistas -vía baja de la renta percibida-. Esto explica por qué desde 2006 comenzaron a registrarse crecientes protestas de los sectores exportadores, en particular de las entidades agropecuarias, a pesar de que sus afiliados no eran -en su mayoría- quienes efectivamente tributaban¹². El punto de partida¹³ de los reclamos estuvo vinculado a la veda exportadora de carne que pretendía hacer bajar los precios internos, conformando una modalidad adicional de la redistribución desde los sectores exportadores netos hacia los importadores netos (“derrame”). La designación de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio Interior no relajó las tensiones, sino que tres meses más tarde las Confederaciones Rurales Argentinas anunciaron el primer paro agropecuario. Días más tarde, ningún funcionario del gobierno asistió a la apertura de la exposición Rural de Palermo. Por su parte, la obligación de liquidar las divisas para alimentar las reservas del Banco Central sí tocaba de cerca los intereses de los exportadores¹⁴, aunque de un modo más relativo dado que las divisas podían ser recompradas en el mercado cambiario (para ser remitidas luego a las casas centrales, por ejemplo).

Por lo tanto, en la fase iniciada en 2005 el conflicto distributivo reapareció con importantes particularidades. Por un lado, no se trató de un enfrentamiento directo entre el conjunto de los trabajadores y el conjunto de los capitalistas -como se nos aparecía antes de contemplar las desagregaciones sectoriales-. Por el otro, debemos ser cautos con el nivel de enfrentamiento: (a) en tanto y en cuanto los capitalistas exportadores netos lograron trasladar las cargas impositivas sobre los rentistas, sus intereses no se vieron directamente afectados por el “derrame” -por la vía fiscal-, sino sólo

¹¹ En el moderno agro pampeano hay un desplazamiento del propietario de la tierra que de organizador de la producción pasa a ser un simple rentista. La explotación extensiva de la tierra cede terreno -gracias a la tecnología- una producción capital-intensiva que permite un uso más intensivo del suelo a la vez que la incorporación de tierras marginales. El hecho de que la siembra de 2/3 de las tierras se realice por terceros y no por los propietarios de la tierra (Bisang, 2008) da cuenta de estas transformaciones. El avance de las grandes empresas agropecuarias -en la cadena oleaginosa la producción, transformación y comercialización se concentra en: Aceitera General Deheza (AGD, Bunge, Cargill, Dreyfus, Glencore (Oleaginosa Moreno), Los Grobo, Molinos Río de La Plata (Grupo Pérez Companc), Monsanto, Nidera y Vicentín- complejiza la separación esquemática entre las diferentes etapas de la cadena productiva en tanto llevan a cabo parte o incluso todas ellas, lo cual deja en una situación aún más marginal a los propietarios. Recordemos que la redistribución se efectiviza fundamentalmente por las vías fiscal (retenciones) y la disponibilidad de divisas (reservas del BCRA); y que en las mismas tiene un peso fundamental las exportaciones de las Manufacturas de Origen Agropecuario -y en segundo lugar las exportaciones de productos primarios-. La retención la tributa el exportador. Pero su poder le permite trasladar el peso del tributo a la hora de negociar el precio de los arriendos con los propietarios.

¹² La mayor parte de estas empresas están afiliadas a la UIA y/o a la COPAL, y no a la SRA, la FAA o la CRA.

¹³ Puede consultarse en el diario La Nación una detallada cronología del conflicto agrario en Argentina desde el 2001 hasta el 2008 en: <http://www.lanacion.com.ar/1055679-cronologia-la-protesta-agraria-en-nuestra-historia>.

¹⁴ Por el decreto 2703/02 firmado por Duhalde las empresas mineras y petroleras estaban obligadas a liquidar únicamente el 30% de sus exportaciones y luego, mediante el decreto 753/04 firmado por Kirchner las mismas quedaron exentas por completo de dicha obligación.

potencialmente; y (b) la liquidación de las divisas¹⁵ permitió al Banco Central su reasignación para la compra de insumos o bienes de capital de otros sectores, pero ante su abundancia las tensiones no se manifestaron de un modo inmediato. En conclusión, la fortaleza (relativa) de los trabajadores y su capacidad para imponer al Estado la absorción de sus demandas desorganizaron la unidad de la clase capitalista en tanto la dividió entre aquellos que gozan de la demanda externa y aquellos que dependen del “derrame” para la ampliación de la producción y la realización de las mercancías en el mercado interno; en otras palabras, se trató de un corte vertical donde fracciones de la burguesía importadora neta junto con los trabajadores enfrentaron a sectores exportadores con el fin de dilatar la acumulación en el mercado interno. Por lo tanto la segunda fase de la postconvertibilidad expresó, entonces, un consenso erosionado “desde arriba” a raíz de la creciente insatisfacción por la sangría de recursos hacia los sectores mercadointernistas (en su conjunto), aparejando cambios en las alianzas a diferentes niveles institucionales.

En primer lugar, en el año 2003 llegó a su fin el pacto de alternancia que mantenían los dos principales nucleamientos -MIA y MIN- de la Unión Industrial Argentina (UIA)¹⁶. Dicho pacto se rompió por divergencias entre las agrupaciones -y en su interior- y la conducción de la institución quedó a cargo de la COPAL (Coordinadora Industrial de Productoras de Alimentos) enrolada históricamente en el MIA. Las mencionadas diferencias motivaron el quiebre y reconstitución de las agrupaciones bajo dos nuevas vertientes (Dossi, 2012): Industriales (ex MIN) y la Celeste y Blanca (ex MIA). La primera, con un importante componente PyME y bajo la conducción de Techint, Arcor, Volkswagen, Peugeot y Citroën, suele asociarse con políticas mercadointernistas y heterodoxas. La segunda, con un menor componente de pequeñas empresas y con las presencias de Ledesma, Aceitera General Deheza (AGD), SanCor, Molinos Río de la Plata, Mastellone, Nestlé, Coca Cola, Kraft, Quickfood, Cargill, Pepsi Cola, Dreyfus, Cervecería Quilmes y Fiat, es habitualmente catalogada como exportadora y liberal. De todos modos, resulta evidente que estos encasillamientos no alcanzan para explicar los agrupamientos. Como aclara Schteingart “no es que los ‘mercado-internistas’ niegan explícitamente el rol de las exportaciones, ni los ‘exportadores’ lo hacen con el mercado interno. Más bien, ponen énfasis en lugares distintos, lo cual implica distintas prioridades a la hora de sugerir políticas públicas” (2011: 21). En 2005 ambas

¹⁵ El decreto 1606/2001 derogó a través su Artículo 5º el decreto Nº 530/91, que suspendía la obligación de las empresas a liquidar sus divisas en el Banco Central restableciéndose la vigencia del Artículo 1º del Decreto Nº 2581/64 y del Artículo 10 del Decreto Nº 1555/86. Información disponible en infoleg.gob.ar

¹⁶ Desde 1993 la UIA (Unión Industrial Argentina) estuvo dirigida por un pacto de alternancia los grandes industriales competitivos internacionalmente -nucleados en el Movimiento Industrial Argentino (MIA)- y los capitales menos competitivos o productores de bienes transables -nucleados en el Movimiento Industrial Nacional (MIN)-. Estos dos núcleos de la central empresaria “si bien coinciden en sus aspectos centrales, presentan ciertas diferencias de significación que vale la pena mencionar: uno se encuentra más ligado a las oportunidades que ofrece el mercado ampliado del Mercosur, y el otro está más vinculado con la integración de la Argentina al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)” (Schorr, 2001: 9). Cabe destacar que -no sin tensiones- este pacto persistió incluso en los momentos más críticos de la Convertibilidad, señal del consenso que el régimen monetario despertaba.

agrupaciones dieron nuevas muestras de consenso mediante un pacto de alternancia que, en el primer período, condujo Héctor Méndez (industria plástica) de la Celeste y Blanca. La erosión “desde arriba” y el malestar de los sectores exportadores llegaron de la mano de la COPAL a la UIA. En sintonía con los reclamos el Presidente de la central industrial aseguró que “así como nosotros decimos que el gobierno no debería intervenir en la cuestión de los salarios, creemos que tampoco tiene que intervenir en los precios”¹⁷ (...) Desde una postura empresaria, mi tarea es defender el principio de no intervención del Estado en la economía” (citado en Schteingart, 2011).

En segundo lugar, las principales organizaciones agropecuarias hicieron llegar su displicencia con la política económica gubernamental en reiteradas oportunidades. La novedad del período radicó en la creciente coordinación entre entidades históricamente enfrentadas, coherente con las transformaciones ya descritas en el ámbito rural y agroindustrial. Las “Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Sociedad Rural Argentina (SRA), aunque de muy diferente composición, ideología, extracción de sus asociados y objetivos generales, [se reunían] con cierta frecuencia para acordar posiciones comunes frente a desafíos serios para el sector” (Merlo y Muro de Nadal, 2010: 2). La acción política también diferenciaba a las entidades: la FAA y la CRA, con ideología diferente, compartían el ejercicio de la acción directa como sucedió con los piquetes del año 2007¹⁸.

Por último, en el ámbito político-electoral la constitución de la Concertación Plural para las elecciones presidenciales del 2007 también dio cuenta de la vigencia del consenso: una alianza entre los dos partidos mayoritarios de Argentina, el Partido Justicialista y un sector disidente de la UCR -y otros partidos menores-. La fórmula, que se inspiraba en la Concertación chilena (una rotación entre partidos de centro-derecha y centro-izquierda), estuvo encabezada por Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos. Diez días después de la victoria electoral, el gobierno anunció un nuevo aumento de las retenciones a las exportaciones.

Desde el inicio de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, los sectores exportadores se propusieron profundizar su orientación y contener la sangría de recursos (plusvalía) hacia una esfera de la producción de la que no participan. A las habituales rispideces con el campo se sumó un comunicado de la UIA el 20 de febrero de 2008, en el cual planteaba que “es indiscutible que la recuperación del poder adquisitivo de la población en general y del trabajador industrial en particular debe mantenerse, pero para lograr este objetivo, es condición necesaria que la economía siga creciendo en un marco estable y previsible. Para esto es necesario que no se vea afectada la competitividad del sector productivo y que no se convaliden expectativas inflacionarias por reclamos infundados”¹⁹. La UIA

¹⁷ En referencia a las retenciones como mecanismo de desacople de los precios locales respecto de los internacionales.

¹⁸ <http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-79472-2007-01-24.html>

¹⁹ <http://www.uia.org.ar/noticia/404>

conducida desde el 2007 por Lascurain (Industriales) transmitía un triple mensaje a la Presidenta: (a) Los salarios estaban poniendo en peligro la tasa de ganancia; (b) los aumentos salariales empujaban los precios, profundizando la tendencia a la revaluación de la moneda; y (c) la entidad empresaria consideraba que los reclamos de mejoras salariales -en un contexto donde aún no se habían alcanzado los índices de 2001- eran infundados. Los tres puntos atacaban de uno u otro modo la redistribución.

Por su parte, el Gobierno Nacional recién electo entendía que la construcción del consenso seguía dependiendo de la redistribución desde la burguesía exportadora neta hacia aquellos cuya reproducción se vincula al mercado interno (capitalistas importadores netos y trabajadores). Con ese propósito impulsó una resolución de retenciones móviles (Resolución 125/08), que no puede interpretarse en su aspecto técnico sino en la búsqueda política de construcción de hegemonía. Insistimos en que el Estado no se constituye como el representante del capital sino como el garante de las relaciones capitalistas, lo que asocia la forma de Estado (y su intervención en los diferentes ámbitos) al devenir de la lucha de clases. Insistencia no injustificada en tanto coloca a la Resolución 125 como resultado del conflicto distributivo, como forma -contingente- de garantizar la integración de las demandas de los trabajadores dentro del marco estatal mediante políticas redistributivas. El estudio de las políticas distributivas de los Estados de Bienestar en el contexto alemán de los años '70 de Muller y Neussus (1971) pueden aportarnos herramientas para interpretar el estallido del conflicto: “mantener ‘la paz social’ es, por consiguiente, un factor determinante para el límite inferior de los beneficios sociales (muy próximos a mantener la capacidad de ‘trabajo y rendimiento, capacitación educativa y movilidad’). La ‘estabilidad de precios’ y la ‘disposición de la gerencia a invertir’ definen el límite superior” (1971: 23). Para los autores el “límite inferior” está dado por la reproducción misma de la fuerza de trabajo, mientras que nosotros lo interpretamos como aquel compatible con la “paz social”, es decir, que podría encontrarse por encima o incluso por debajo del nivel de reproducción de la fuerza de trabajo.

La redistribución mediante las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y comercial permitió eludir los “límites inferiores” de la “paz social” -construyó consenso entre los trabajadores-. Desde el año 2005, la creciente intensidad del “derrame” comenzó a deteriorar el consenso entre fracciones de la burguesía. En el año 2008, las retenciones móviles, que para el caso de nuevos aumentos de los precios internacionales preveían una carga tributaria que podría haber superado el 50%²⁰, flanquearon el “límite superior” de la “paz social” y lanzaron a las centrales empresarias del campo a la protesta. El 11 de marzo de ese año la Federación Agraria anunció el estado de alerta y movilización. El 12 de marzo se declaró el paro agropecuario con el apoyo de las cuatro entidades rurales, ahora formalmente cohesionadas en la Mesa de Enlace. En este sentido, el llamado Conflicto del campo no constituyó el reflejo de una crisis internacional, sino la crisis de una forma distributiva enraizada en las disputas en

²⁰ Las alícuotas pueden encontrarse en el texto de la Resolución:
<http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138567/texact.htm>

torno a la definición del trabajo necesario y la apropiación del plustrabajo. Las consecuencias de la crisis internacional sobre la economía argentina -que sí existieron- posiblemente no hubieran conducido al Conflicto del Campo bajo otra configuración de las correlaciones de fuerza internas.

Frente al estallido de este conflicto, la UIA sostuvo una posición distante respecto de la Mesa de Enlace. Tanto es así que, el mismo día del anuncio de las retenciones, su presidente, Lascurain, sostuvo una reunión con la Presidenta de la Nación donde “ratificaron que la agregación de valor será la directriz del desarrollo productivo, actuando así como estímulo para acrecentar la calidad institucional, lograr una educación de excelencia y alcanzar un desarrollo científico-tecnológico ligado a la producción. También se enfatizó la necesidad de continuar preservando el mercado interno, frente a riesgos globales y de promover una inteligente inserción argentina en los mercados internacionales”²¹. Cinco días más tarde, la cámara industrial se reunió con el Ministro de Economía -quien había firmado la resolución 125-; “ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar mejoras de competitividad del sector productivo, y en particular del sector industrial, destacándose la importancia de la inversión y el financiamiento”²².

El acuerdo entre el Gobierno Nacional y los industriales en torno a la agregación de valor, exportaciones y reorientación de recursos al (“preservación del”) mercado interno aparentó una revitalización de la rivalidad entre agro e industria, tan cara al siglo XX. De hecho, así lo interpretan Basualdo y Arceo en *Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles* (2009) al afirmar que la confrontación “indica la intención del agro pampeano de terciar en la disputa por la distribución del ingreso y, al mismo tiempo, subordinar a los asalariados y a la producción industrial a su propio proceso de acumulación de capital” (2009: 75). En cambio, desde nuestro punto de vista, los cambios operados en el agro y en la industria, la centralidad estructural de los sectores exportadores (esfera superior) y el rol determinante de las Manufacturas de Origen Agropecuario tiñeron de un modo *sui generis* el conflicto interburgués, desbordando los marcos de análisis construidos por el pensamiento económico latinoamericano hace algunas décadas. La capacidad de los capitalistas del sector de industrialización de materias primas (MOA, manufacturas de origen agropecuario según la clasificación del INDEC) de trasladar una parte importante del costo del “derrame” a otros eslabones (aguas arriba) de la cadena productiva y sus beneficios usufructuados por los capitalistas del resto de la industria manufacturera (importadores-netos) motivaron la desestimación inicial de los reclamos de la Mesa de Enlace por parte de la UIA. Sin embargo, no puede menospreciarse el hecho de que desde el 14 de marzo de 2008 la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores Cerealeros (CEC) se sumaron a las protestas. “Si bien no tienen representación como cámara en la UIA, a ellas se encuentran asociadas empresas agroindustriales como AGD, Bunge, Cargill, LDC, Molinos y Nidera”, que formaron parte de la lista de

²¹ <http://www.uia.org.ar/noticia/414>

²² <http://www.uia.org.ar/noticia/418>

alternancia de la UIA, la Celeste y Blanca (Coviello, 2014).

El 18 de marzo de ese año, ante la complacencia de la conducción de la UIA con el Gobierno Nacional, recrudeció el conflicto interburgués: “los productores rurales cordobeses bloquearon la entrada a la Aceitera General Deheza, perteneciente a la familia del senador nacional Roberto Urquía, quien había defendido el sistema de retenciones móviles” (Comelli, 2010: 29). Diez días más tarde, la entidad industrial publicó una solicitada donde llamaba al diálogo entre las partes; un modo diplomático de anunciar su neutralidad en el conflicto. El comunicado del 27 de marzo planteaba:

“Es incuestionable el rol del campo como eslabón clave de la cadena productiva nacional, incluyendo los numerosos sectores industriales que participan en su proceso productivo, los cuales están representados a través de sus cámaras en la Unión Industrial Argentina. Por ello nuestra institución considera que es su obligación reiterar la necesidad de reforzar los eslabones de las cadenas productivas para consolidar este exitoso ciclo económico, en el cual todos los sectores deben estar integrados para alcanzar el desarrollo que nuestro país requiere. En este sentido y frente a los momentos de alta sensibilidad que estamos transitando, es necesario remarcar la necesidad del diálogo franco y responsable entre las partes”²³.

No es el propósito del presente trabajo realizar una detallada cronología del conflicto (que puede consultarse en Comelli et al., 2010), sino que nos proponemos destacar algunos elementos que permitan comprender el comportamiento de las clases y fracciones de clases intervinientes. En el informe sobre la *Actividad Industrial* publicado oficialmente por la UIA, la entidad daba cuenta de las secuelas que estaba sufriendo a causa de un conflicto del que pretendía mantenerse neutral: “El mes de marzo mostró una desaceleración de la actividad industrial, al presentar un crecimiento interanual del 3%. Sin embargo, este comportamiento se debió fundamentalmente a la caída en la producción de la industria alimenticia (-10,1%), que tuvo lugar a partir de la segunda quincena de marzo, en el marco del paro agropecuario”²⁴. En el informe sobre la *Actualidad del Comercio Exterior* correspondiente al mismo mes la entidad describía el aumento más que proporcional de las importaciones por sobre las exportaciones manufactureras²⁵. Durante el mes de junio, “la actividad presentó una caída desestacionalizada de 4%. Este comportamiento estuvo ligado principalmente al conflicto en el sector agropecuario, toda vez que las caídas se concentraron en la industria alimenticia (-9,9%), fundamentalmente en la molienda de cereales y oleaginosas (-25,6%) y carnes rojas (-18,1%)” (*Actualidad Industrial*, Nro. 7, UIA).

La afectación de los intereses de la manufactura exportadora se tradujo en los posicionamientos

²³ <http://www.uia.org.ar/noticia/421>

²⁴ <http://www.uia.org.ar/noticia/430>

²⁵ <http://www.uia.org.ar/noticia/435>

de la UIA. Si bien nunca terminó por distanciarse abiertamente de la política del Gobierno Nacional, la central empresaria “realizó numerosas manifestaciones públicas -comunicados de prensa y dos visibles solicitadas el 27 de marzo y 17 de mayo-, para remarcar el ‘incuestionable rol del campo’ en el desarrollo nacional, instando al ‘diálogo franco y responsable entre las partes’, expresando que un futuro acuerdo institucional con vistas al Bicentenario ‘es impensable e imposible sin la participación activa del sector agropecuario’. Asimismo, alertó sobre las graves consecuencias que la situación planteada estaba generando a toda la sociedad argentina’ (Lascurain en La Nación 30/07/2008²⁶). En otra muestra de apoyo implícito a la Mesa de Enlace los “representantes de la UIA se habían reunido con la Presidenta para tratar el Acuerdo del Bicentenario, una propuesta que el GN [Gobierno Nacional] quería sellar para el 25 de mayo. Sin embargo, sólo se analizó el temario a incluir en el acuerdo y no se logró un compromiso explícito de firmarlo, al menos hasta que no se resolviera el conflicto agropecuario” (Coviello, 2014: 15).

Mientras los sectores MOA lograron trasladar a los propietarios de la tierra los costos/pérdidas asociados a la redistribución, la forma distributiva persistió como una alianza entre clases *erosionada desde arriba*, por la cual -no sin disgustos- “todos ganaban”. El Conflicto del campo afectó al conjunto de las cadenas productivas, cuyos eslabones iniciales se encontraban en el agro, y permitió a los propietarios de la tierra poner en discusión la redistribución: los capitalistas exportadores netos terminaron coludiendo -implícitamente- con la Mesa de Enlace. Finalmente, el conjunto de la burguesía exportadora (agropecuaria y agroindustrial) orientó su acción política a cerrar el “derrame” que alimentaba al mercado interno.

El 25 de mayo de 2008 se desarrollaron dos actos donde se cristalizaron las posiciones del Gobierno Nacional, por un lado, y las de la Mesa de Enlace, por el otro. En este complejo escenario la UIA encontró al tratamiento legislativo como una solución que le permitía apoyar a la Mesa de Enlace (desautorizando las competencias del Poder Ejecutivo en materia tributaria) sin romper los lazos con el Gobierno Nacional. El 5 de julio, el proyecto fue tratado y aprobado en la Cámara Baja.

El 17 de julio de ese año la media sanción que pretendía convertir la Resolución 125 en ley fue tratada en el Senado de la Nación. El hecho mismo de la prolongación del conflicto y su canalización institucional/parlamentaria volvió a reafirmar que el Estado no puede pensarse como un mero representante del capital sino como un momento de la mediación entre las clases y las fracciones de clase. En tanto “que la burguesía en su conjunto, económicamente disgregada por la competencia, sólo puede constituirse políticamente como clase gracias a esa mediación del Estado” (Bonnet, 2012: 104), el empate y posterior definición “no positiva” del vicepresidente Cobos dio cuenta de una mediación que puso fin a las fuerzas centrífugas que operaban entre los capitalistas clausurando el “derrame” e institucionalizando una nueva correlación de fuerzas que modificó el tablero de alianzas y

²⁶ <http://www.lanacion.com.ar/1034698-cartas-de-lectores>

confrontaciones. A tan sólo 7 meses de la alianza entre peronistas y radicales, el experimento que pretendió mostrar al Estado como representante del interés general independizado de los intereses particulares, fracasó. Al menos quedó demostrado -sobre todo después del voto “no positivo”- que una estrategia de transversalidad política como la impulsada por el Frente para la Victoria no era compatible con una política que pretendía la paradójica situación en que el mercado interno subordine -mediante una redistribución cada vez más intensa- a los exportadores netos.

4. EL IMPASSE

El año 2008 representó un punto de inflexión. El Conflicto del campo terminó modificando las correlaciones de fuerza de modo tal que nos permitiría afirmar el cierre de una primera gran fase de la postconvertibilidad, caracterizada por el avance de los trabajadores por sobre los capitalistas, a su vez subdividida en dos fases. La mejora persistente en la distribución del ingreso (GRÁFICO 6) desde 2003 hasta 2008 también enfrentó dos velocidades. Mientras que hasta el año 2005 el índice de Gini muestra una caída/mejora promedio respecto del 2001 de un 2%, desde ese año la distribución se aceleró y en promedio, entre 2005 y 2008, el índice cayó/mejoró un 8%. La disponibilidad de divisas y el superávit fiscal permitieron garantizar una mejoría importante en la distribución del ingreso hasta 2008, coherente con la fortaleza relativa de los trabajadores.

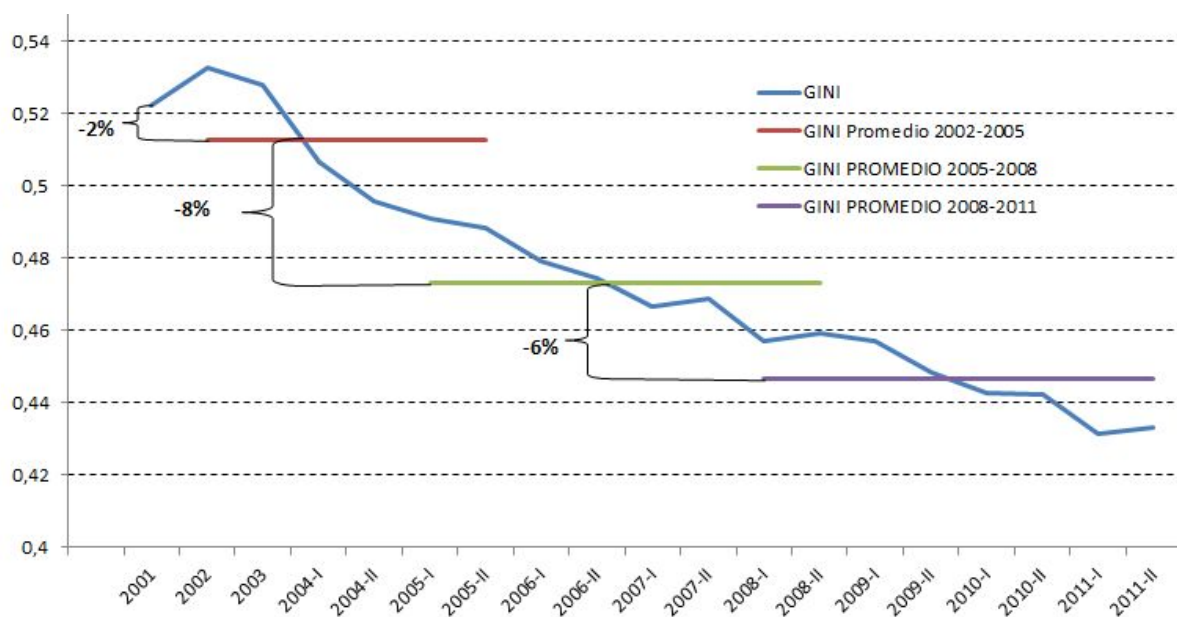
El Conflicto del Campo puede interpretarse como una crisis de instauración de un Estado Social (Lechner, 1975). El “derrame” puso en movimiento fuerzas sociales que buscaron bloquearlo, abriendo un *impasse*. Las divisas que adquiría la burguesía exportadora garantizaba la expansión fiscal, monetaria y la estabilidad cambiaria. Es decir, que la reproducción ampliada del mercado interno y de la burguesía orientada “hacia adentro” requería de los recursos (plusvalía) que mediante las dos vías (comercial e impositiva) aportaba la burguesía orientada a la exportación. Sin esta redistribución resultaba imposible sostener la actividad interna, generar empleo y ampliar el consumo -pilares de la reconstrucción hegemónica-. En tales circunstancias la burguesía mercadointernista arribó a una contradicción en tanto: a) dependía de la exitosa inserción comercial de la burguesía exportadora neta y por lo tanto existían elementos objetivos que motivaban una alianza entre ambas fracciones con el objetivo de limitar la redistribución y las conquistas de los trabajadores; y b) requería de cierta correlación de fuerzas que garantice la mencionada redistribución desde los sectores exportadores, motivando una alianza con los trabajadores²⁷.

En el 2008, con el Conflicto del campo quedó claro que en el capitalismo argentino de la postconvertibilidad no era posible gobernar persistentemente en contra de quienes conseguían los

²⁷ Los dos polos de la contradicción a la que arribó la burguesía mercadointernista (importadora neta) dan cuenta de la superficialidad del enfrentamiento interburgués, que sin excluir por eso etapas de mayor conflictividad, no conformó un antagonismo irreductible.

dólares que posibilitaban la lubricación de la acumulación en el mercado interno. Por otro lado, no era posible construir gobernabilidad en contra de los sectores que vivían de y se reproducían en la esfera inferior. El *impasse* se fundó en la separación (estructural) y autonomización (política) de dos esferas -una superior/sector externo y otra inferior/mercado interno que le era subsidiaria-, en la necesidad de construir consenso y en la nueva correlación de fuerzas resultante del Conflicto del campo. En los años '70, la crisis del Estado se manifestó como un empate social (Portantiero, 1973) cuyo “desempate” tomó la forma del Estado autoritario (O'Donnell, 1982). A continuación veremos qué forma adoptó en Argentina desde el *impasse* con el fin de la ilusión de la conciliación de clases y el comienzo de una etapa más puramente política, donde el gobierno debió maniobrar entre intereses expresamente contrapuestos²⁸.

GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA FAMILIAR (GINI). 2001 – 2011.



Fuente: Elaboración propia en base a CEDLAS y CEDLAC.

No obstante la Resolución 125 terminó derogándose -y con ella al propio Ministro de Economía-, el Gobierno Nacional no renunció a seguir articulando las necesidades de ambas esferas y buscó la forma de seguir alimentando al mercado interno. Ello implicó por un lado un enfrentamiento más directo con los exportadores²⁹, materializado en un crecimiento de la intervención estatal en la

²⁸ Sobre el Estado y su capacidad (y límites) de representar el interés general puede revisarse los textos de Lechner (1977)

²⁹ El 1ero de marzo de 2009, a un año del estallido del Conflicto del Campo, Cristina Fernández de Kirchner decía en la apertura de sesiones legislativas: “Cooperación que significa solidaridad por parte de aquellos que en este proceso económico y en estos años han tenido la suerte de poder acumular una rentabilidad tan importante, que les permite ser el único sector económico que puede no comercializar sus productos (...)”. “Hay un formidable esfuerzo de todos, subsidios al gasoil para que la producción también pueda tener mayor competitividad, cosas que todos ustedes saben. Creo que es entonces necesario que esos sectores que por diversos motivos que tienen que ver con este modelo económico han podido tener una rentabilidad más que buena, en algunos casos

economía. En el nuevo contexto, la única forma de seguir incrementando el gasto era mediante una reforma tributaria profunda que –a su vez- no era posible sin reabrir el conflicto. Pero el debilitamiento de las empresas privatizadas y del sector financiero permitió, en un contexto de tasas de interés reales negativas, pensar en la conveniencia de reestatizar el sistema jubilatorio. Se trataba de una medida *win-win*: se afectaba un sector ya desinteresado en el negocio y no se afectaba a los sectores que adquirirían divisas.

La novedosa tendencia a la baja del superávit (GRÁFICO 5), como producto de una mayor aceleración del gasto respecto de la recaudación, puso de manifiesto un doble movimiento: a) positivo, en tanto el gobierno definió reforzar su legitimidad entre los capitalistas mercadointernistas y los trabajadores profundizando la redistribución; b) negativo, en tanto el gobierno decidió *no* tomar medidas drásticas (como la nacionalización del comercio exterior o la instauración de organismos similares al IAPI), sino aceptar la nueva correlación de fuerzas y los límites que la misma impone. Este doble movimiento, a veces apoyado en los exportadores y otras veces en el mercado interno, buscó seguir garantizando el crecimiento y la distribución. En este contexto, las elecciones legislativas del 2009 se presentaban como la gran oportunidad para un recambio parlamentario que permitiera colocar un torniquete al “derrame” o al menos lograr nuevas concesiones para los capitalistas exportadores netos. La derrota del Gobierno Nacional, sin embargo, sólo complejizó el *impasse*. Frente al adverso contexto internacional, lejos de ajustar el mercado interno, el Poder Ejecutivo intervino en la economía impulsando diversas medidas sociales gracias a la estatización de los fondos jubilatorios. La más trascendente consistió en el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo, un subsidio para trabajadores informales o formales de bajos ingresos.

La creciente autonomización del ritmo de crecimiento del mercado interno (consumo de divisas) y del sector externo (adquisición de divisas), al tiempo que articuladas por una también creciente intervención estatal, comenzó a configurar las características del *impasse* en la nueva fase de la postconvertibilidad. Durante el 2009, los trabajadores volvieron a incrementar su participación en el producto alcanzando por primera vez las condiciones de 1994 (GRÁFICO 3). Por su parte, la generación de empleo se desaceleró respecto de la fase anterior, por lo que los planes sociales explicaron crecientemente el pronunciado descenso de la pobreza. A la vez, la informalidad laboral que descendió por debajo de los niveles de la Convertibilidad desde 2009 se estancó en torno al 35% de los trabajadores beneficiando a la burguesía en su conjunto.

Si durante la primera gran fase de la postconvertibilidad constatamos un corte vertical, después del Conflicto del campo la lucha en torno a la definición del trabajo necesario y la apropiación del

extraordinaria, tengan la solidaridad no por cuestiones de ética, sino por cuestiones de inteligencia y sustentabilidad del propio modelo para seguir creciendo y avanzando”. Disponible en: <http://www.cfkargentina.com/mensaje-de-cristina-a-la-asamblea-legislatura-2009/>

plustrabajo comenzó a tomar otro cariz. Para los empresarios dedicados a la exportación, los incrementos salariales sólo constituían una pérdida de ganancias en tanto, por un lado, persistió una estabilidad nominal del tipo de cambio y, por el otro, la realización de las mercancías no dependía de esos trabajadores. Además, estos sectores empezaron a pedir una devaluación que volviera a licuar el salario de sus propios trabajadores. En la esfera inferior, los empresarios dedicados a abastecer al mercado interno se vieron perjudicados por el incremento del salario real que pasó a convertirse más en un costo que atentaba contra su tasa de ganancia que una demanda que la sostenía. Por consiguiente, tanto en el frente externo como en el frente interno existían elementos que acercaban los intereses de las diferentes fracciones de la burguesía. El otrora corte vertical que articulaba los intereses entre diferentes clases, en la nueva fase de la postconvertibilidad se tornó en un corte cada vez más horizontal.

En diciembre de 2009, Cristina Kirchner anunció la creación del Fondo del Bicentenario que pretendía aprovechar las abultadas reservas internacionales (47.000 millones de dólares) para garantizar el pago de la deuda externa ante una eventual crisis. No obstante –aunque parezca paradójico- la medida no fue aceptada por el presidente del Banco Central Martín Redrado, miembro del establishment financiero y funcionario del Ejecutivo desde el 2004. El funcionario fue cesanteado del cargo y en su lugar la Presidenta anunció a la desarrollista Marcó del Pont quien, –también paradójicamente- conformó el Fondo para el Desendeudamiento Argentino, a la vez que ejecutó una política monetaria expansiva (la base monetaria creció durante el 2010 en un 33%). La tasa de interés real negativa permitió la expansión del consumo a los sectores medios (promociones de hasta 50 cuotas sin interés) y el tipo de cambio real apreciado -por la inflación- permitió consumos de mercancías y servicios (turismo) importados, contribuyendo con el gobierno en la recuperación de su legitimidad³⁰. Como señala Piva (2015: 154), la imposibilidad de canalizar las demandas de todas las fracciones impuso la necesidad de mecanismos que desplazaran hacia adelante la contradicción. El crédito y el tipo de cambio apreciado permitieron justamente evitar el enfrentamiento entre los requerimientos particulares de cada fracción. La segunda parte de la postconvertibilidad transcurrió sobre un sendero cada vez más angosto donde el gobierno buscaba hacer equilibrio. En este período se multiplicaron las medidas que favorecían a unos y otros sectores, lo que a su vez volvía más estrecha la senda de una política económica que no rompiera los “límites inferiores o superiores” de la “paz social”.

El aspecto estrictamente político de la política económica explica que la construcción del consenso requirió un balanceo entre las demandas de las diferentes fracciones capitalistas y de los trabajadores: estímulo a las exportaciones por un lado, y estímulo al mercado interno, por otro, pusieron en movimiento una creciente fuerza centrífuga. La capacidad del Poder Ejecutivo de regular la

³⁰ Adicionalmente, esta definición política fue acompañada de una agenda democrática sensible a trabajadores de estratos medios como la ley de medios y el matrimonio igualitario, entre otras medidas.

crisis a la que conducía la creciente independencia entre el mercado interno y el sector externo tenía como condición de posibilidad hallar nuevas fuentes de financiamiento interno, dada la vigencia del *default*.

El *impasse* tuvo -a diferencia del empate que describe Portantiero (1977)- siempre al Frente para la Victoria como pivote de apoyo para procesar los vaivenes y mantener encauzados a los sectores pertenecientes a ambas esferas. La expansión del empleo y el crecimiento del salario dependieron del ritmo de acumulación de las industrias importadoras netas para lo cual, a su vez, requerían de divisas que obtenían los capitalistas exportadores netos al realizar sus mercancías en el exterior. En consecuencia, el *impasse* no debe interpretarse como una situación estacionaria o de equilibrio social, sino como inestabilidad permanente, como situación inestable. No sin tensiones, la política económica le permitió al gobierno transitar el filoso equilibrio y reconstruir el consenso entre los trabajadores y entre los capitalistas. En 2011 los trabajadores consiguieron subas salariales por encima de la inflación, la burguesía mercadointernista disfrutó de picos de consumo, mientras sectores medios lograban internacionalizar su consumo (importaciones de bienes y servicios). Por su parte las exportaciones crecieron un 23% respecto del año anterior y las crecientes importaciones sólo perjudicaron en 1300 millones de dólares el saldo comercial. Los crecientes compromisos financieros (rubro Rentas netas al exterior) y la fuga de capitales (formación de activos netos en el exterior), terminaron por configurar una cuenta corriente del balance de pagos negativa por segundo año consecutivo y, por primera vez, desde 2002 el Banco Central perdió Reservas Internacionales (más de 6000 millones de dólares), exponiendo fuertes dificultades. El pico de recaudación impositiva permitió una política económica expansiva orientada a los sectores donde más golpeaba la pobreza y el trabajo en negro, que dio como resultado una nueva caída del superávit fiscal. La desigualdad se redujo, pero ya no tan aceleradamente como en la primera fase de la postconvertibilidad. Por otra parte el gobierno buscó reconstruir el pacto con la burguesía de ambas esferas mediante el Plan Estratégico Agroalimentario Y Agroindustrial 2020 y el Plan Estratégico Industrial 2020. Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos.

CONCLUSIONES

1. Una comprensión cabal de la crisis de la convertibilidad debe incorporar la centralidad de las luchas contra el neoliberalismo. El análisis del conflicto distributivo permite explicar la fuerza de los trabajadores y su capacidad para imponer al Estado condiciones para la reconstrucción del consenso.

2. Mientras la capacidad de conducir la acumulación de las fracciones exportadoras netas no sufrió un asedio definitivo, sino incluso se vio reforzada aquellas fracciones no lograron retener para sí la totalidad de los “frutos del comercio internacional”. Los trabajadores impusieron la redistribución hacia el mercado interno -“hacia abajo”-, constituyéndolo en uno de los motores de la economía. El

Estado y su política económica incorporó, de un modo también renovado, la articulación entre ambos motores de tal modo que se garantizaron los “límites superiores e inferiores” de la “paz social” (Muller y Neussus, 1970): la primera etapa del “todos ganan” entre 2002 y 2005. Asimismo, la persistencia de la distribución del ingreso estableció a partir de 2005 un corte vertical entre (a) una fracción capitalista que adquiere divisas -mediante las exportaciones- pero es incapaz de brindar fundamentos a la integración de las demandas populares dado que su producción es capital-intensiva y está orientada a la exportación (b) una fracción capitalista que puede construir consenso dado que su producción es trabajo-intensiva y está orientada al mercado interno, pero que requiere de divisas para su expansión y por lo tanto es fuente de desequilibrios macroeconómicos. El consenso, si bien persistió, se “erosionó desde arriba”.

3. En 2008, el Conflicto del Campo expresó una crisis de instauración de Estado Social que enfrentó a las dos fracciones recién mencionadas y no al clivaje “campo vs. industria”. El resultado del conflicto no clausuró el derrame desde el sector externo hacia el mercado interno sino que abrió un impasse que duró hasta -al menos- el 2011. El impasse es el intento de la fuga hacia adelante de las contradicciones entre los intereses de los diferentes clases y fracciones de clase, lo que motiva que una vez que los recursos escasean para construir el consenso por momentos se satisfaga a unos y otra vez a otros.

4. Por lo tanto entendemos que el período estudiado se caracteriza por un avance de los trabajadores que obliga al Estado a contemplar o contener -expandiendo o limitando al mercado interno- sus demandas, aunque con una fortaleza relativa que no pone en tela de juicio ni la subordinación del mercado interno ni cuenta con una alternativa societal a la vista.

BIBLIOGRAFÍA:

Aglietta, M. [(1976) 1999] *Regulación, y crisis del capitalismo*, Siglo XXI, México.

Aranda, R. (2004) “La política exterior de Menem a Kirchner”, *Revista Relaciones internacionales*, Nro. 27, IRI-UNLP, Argentina

Arceo, E., Basualdo, E. y Arceo, N. (2009) *La crisis mundial y el conflicto del agro*, UNQ-CCC, Buenos Aires

Barsky y Dávila (2009) *La rebelión del campo*, sudamericana, Argentina

Basualdo, E. (2008) *La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales*, CELS, Argentina

Basualdo, E., Lozano, C. y Schorr, M. (2002) “Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la presidencia de Duhalde. El nuevo plan social del gobierno”, *Realidad Económica*, Nro. 186, IADE, Argentina

Bonnet, A. (2002) “Que se vayan todos. Crisis, insurrección y caída de la convertibilidad”, *Cuadernos del Sur*, Nro. 18, Argentina

- _____ (2012) "Riñas en la cofradía. Los conflictos interburgueses en las crisis argentinas recientes", *Conflicto Social*, Nro. 5, FSOC-UBA, Argentina.
- Cavallo, D. (2004) *Argentina y el FMI durante las dos administraciones Bush*. Disponible en http://www.cavallo.com.ar/wp-content/uploads/Argentina_y_el_FMI.pdf
- Comelli, M. et al (2010) "La trama de un conflicto extendido. El conflicto agrario marzo-julio de 2008" en Giarracca, N. y Teubal, M. (Coords.) *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*, Buenos Aires, Antropofagia.
- Coviello, R. (2014) "El posicionamiento de la Unión Industrial Argentina durante el conflicto agropecuario de 2008", *Realidad Económica*, Nro. 282, IADE, Argentina
- Damill, M., y Frenkel, R. (2013) *La economía argentina bajo los Kirchner: una historia de dos lustros*, ITF-CEDES, Argentina
- Dossi, M. V. (2012) *Documentos de Investigación Social número 19: La Unión Industrial Argentina: su organización y vinculaciones con el mundo de las corporaciones empresarias*. IDAES, Argentina
- Dri, R. (2006) *La revolución de las asambleas*, Ediciones Diaporías, Argentina
- Gaggero, A., & Wainer, A. (2004) "Burguesía nacional - Crisis de la convertibilidad: el rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio", *Realidad económica*, Nro. 204, IADE, Argentina.
- Jessop, B. (1980) "Teorías recientes sobre el Estado capitalista", *Críticas de la economía política*, Nro. 16/17, UNAM
- _____ (1990) *State theory: putting the capitalist state in its place*, Polity Press, Cambridge
- Lechner, N. ([1976] 2012) "Contra la ilusión del Estado social", en *Obras completas*, Tomo I, Fondo de Cultura Económica-FLACSO, México.
- Lindenboim, J. (2007) *Calidad del empleo y remuneraciones: el desafío actual*, Realidad económica, Nro. 228, IADE, Argentina
- Merlo S. y Muro de Nadal, M. (2010) *Documento de trabajo número 5: La alianza entre las entidades del agro en el marco de la comisión de enlace: ¿Un pacto coyuntural o acuerdo permanente?*, CIEA-FCE-UBA, Argentina
- Muller, W. y Neusüss, C. (1970) "La ilusión del Estado Social y la contradicción entre trabajo asalariado y capital", *Sozialistische Politik*, Nro. 6/7, Alemania
- Ortiz, R. y Schorr, M. (2006) "La economía política del gobierno de Alfonsín: creciente subordinación al poder económico durante la 'década perdida'", en Pucciarelli, A. (coord.) *Los años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?*, Siglo XXI, Argentina
- Peralta-Ramos, M. (2007) *La economía política argentina: poder y clases sociales, 1930-2006*, Fondo De Cultura Económica, Argentina.
- Piva, A. (2012) *Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista*, Biblos, Buenos Aires.
- _____ (2015) *Economía y Política en la Argentina kirchnerista*, Ed. Batalla de Ideas, Argentina.
- _____ (2017) "El modo de acumulación de capital en Argentina (1989 – 2015)", *Revista Ensamblés*, Nro. 6, IIGG-UBA, Argentina.
- Porta, F., Santarcángelo, J. y Schteingart, D. (2014) *Sobre el Excedente y desarrollo industrial en Argentina*, CEFID-AR, Argentina.
- Portantiero, J. C. (1973) "Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual", en Braun, O. *El*

capitalismo argentino en crisis, Siglo XXI, Argentina.

_____ (1977) "Economía y política en la crisis argentina: 1858-1973", *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 39, Nro. 2, UNAM, México.

Prebisch, R. ([1949] 1950) "El desarrollo de América Latina y algunos de sus principales problemas", *Revista de ciencias económicas*, Año 38, serie III, Buenos Aires.

Pryluka, P. (2015) *Between Shock and Gradualism: Liberalization Policies in Argentina and Chile*. Instituto Internazionale di Storia Economica, Italia.

Salvia, S. (2009) *Crisis del neoliberalismo, lucha interburguesa y desarrollo capitalista en la argentina (1999-2005)*. Actas XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.

Schorr, M. (2001) *¿Atrapados sin salida?: la crisis de la convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico*, FLACSO, Argentina.

Schteingart, D. (2011) *Documentos de Investigación Social Número 17: La concepción del desarrollo de la Unión Industrial Argentina (2000-2010)*, IDAES, Argentina.